

sentacion del párroco de Mexicaltzingo, D. Trinidad Ochoa, contra los procedimientos de la gefatura superior de hacienda de esa capital, en virtud de los cuales se pretendia lanzar ejecutivamente á su poderdante de la casa y huerta que ocupa, y se halla situada en la manzana núm. 28 del cuartel 7º, cuyas providencias importan un ataque al derecho de propiedad que tiene como cura de dicha parroquia, á la casa que asegura estar exceptuada por la ley de nacionalizacion. Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que la gefatura superior de hacienda al admitir el denuncia de la casa mencionada, al enagenarla y mandar poner en posesion de ella al adjudicatario, obró en la órbita de sus atribuciones y con total arreglo á las leyes, sin que sus procedimientos importen violacion alguna de las garantías otorgadas en los artículos 13 y 27 de la Constitucion general de la república; que el peticionario no probó ante la gefatura superior de hacienda su excepcion, ni ha presentado documento alguno por el cual aparezca que la casa en cuestion es de las exceptuadas por las leyes de reforma que decretaron la nacionalizacion de bienes eclesiásticos. Con tales fundamentos se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Guadalajara, que en su parte resolutive declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al cura de Mexicaltzingo en la propiedad de la casa mencionada, por no estar violadas las garantías de que se ha quejado contra el gofo superior de hacienda de esa ciudad.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Te-*

jada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Setiembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. *Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por Cristóbal Gonzalez, contra una determinacion del ministerio de la guerra, que viola en la persona del quejoso, la garantía que otorga el artículo 5º de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor dice: que el C. Cristóbal Gonzalez interpuso recurso de amparo, por que siendo trabajador de la fábrica de lanas, situada en el callejon del Bosque, fué tomado de leva en 1870 y consignado á la comandancia militar al servicio de las armas. Se queja, de que habiendo servido hasta el 8 de Octubre del mismo año en que su batallon fué derrotado en el Sur, separado desde entonces de la milicia, y habiendo vuelto á su trabajo de operario en la citada fábrica, se le ha reaprehendido teniéndolo como desertor. En el informe respectivo, el C. comandante militar asintió al dicho de Gonzales, y manifestó que fué tomado de leva durante el periodo que se suspendieron las garantías individuales por la ley de 17 de Enero del mismo año. Recibido el juicio á prueba, Gonzalez ha rendido informacion para acreditar que es hijo de viuda, trabajador de la fábrica del Bosque, y que sostiene á su familia de quien es único apoyo. Esta prueba es inconducente

al punto del amparo, pues la ley que suspendió las garantías no lo hizo en la 1ª parte del art. 5º, que es el reclamado, para los hombres delincuentes, sino para todo ciudadano mexicano. En el caso puede otorgársele el amparo, porque habiendo desertado el 6 de Octubre la ley de amnistía de 14 del mismo la concedió á los militares que hubieran consumado desercion hasta esa fecha.

Por lo expuesto, puede el juzgado declarar que la justicia federal ampara al C. Cristóbal Gonzalez en el acto reclamado.

México, Setiembre dos de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Herrera Campos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de México.—México, Setiembre cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: y considerando que este juicio se ha seguido ante este juzgado primero de Distrito á solicitud de Cristóbal Gonzalez, el que asegura que se han violado en su persona las garantías que otorga el art. 4º de la Constitucion general de la República, por el ministerio de la guerra; que el quejoso fué tomado de leva en Febrero de mil ochocientos setenta, y consignado al batallon núm. 23; que sirvió con las armas hasta el ocho de Octubre del mismo año, día en que su batallon fué derrotado en el Sur; que volvió á su trabajo en la fábrica del callejon del Bosque, y que fué reaprehendido como desertor el 18 de Junio de este año; que por esto pidió su licencia absoluta, la que fué apoyada por el coronel de su cuerpo y por la comandancia militar, y desechada por el ministerio de la guerra, porque era desertor; que habiendo desertado el 8 de Octubre del año próximo pasado, y habiéndose publicado la ley de amnistía el 14 del mismo mes que le concedió á los militares que hubieran consumado de-

sercion hasta esa fecha; es claro que al quejoso se lo debe conceder el amparo que pide, pues tiene en su apoyo los artículos 4º y 5º de la Constitucion, y que el ministerio de la guerra al rendir el informe que se le pidió, conviene en que Gonzalez cometió el delito de desercion, y el C. promotor en su pedimento, es de parecer que se debe conceder el amparo por haberse violado las garantías que otorgan los artículos citados; con arreglo á lo expuesto, á los artículos 101 y 102 de la Constitucion y al tenor de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la justicia federal ampara á Cristóbal Gonzalez, en contra de la determinacion del ministerio de la guerra para que siga de soldado y no juzgado como desertor.

Ilágase saber y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia, sacándose previamente copias de esta sentencia, para que se publiquen en el *Diario oficial y Semanario Judicial.*

Así lo mandó y firmó el C. juez 1º de Distrito, Lic. José Isaac Sanchez. Doy fé. *J. I. Sanchez.—Joaquín Sanchez Gonzalez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 20 de Junio último promovió ante el juez 1º de Distrito de México, Cristóbal Gonzalez, clarin de la banda del batallon núm. 23 de línea, exponiendo: que en 2 de Febrero del año próximo pasado fué tomado de leva y consignado al servicio de las armas en el batallon referido; que desertado el día 8 de Octubre volvió á su ocupacion habitual, en calidad de operario de una fábrica de tejidos de lana; y que reaprehendido como desertor en 18 de Junio de este año, se le obliga á continuar en el servicio de las armas contra su voluntad y con infraccion

del art. 4º de la Constitución de la República, negándole el ministro de la guerra la licencia absoluta que le ha pedido, porque alega que es desertor; Visto el informe del ministerio de la guerra, confirmando los hechos asentados por el promovente, explicando con apoyo de la filiación de éste, que fué consignado al servicio militar por cinco años, y sosteniendo que no ha habido violación de garantías, porque la consignación se verificó estando aquellas suspensas por la ley de 17 de Enero de 1870. Vistos los pedimentos del promotor fiscal, la prueba y alegato del quejoso, y la sentencia del juez 1º de Distrito con todo lo demás que fué necesario tener presente.

Considerando: que Cristóbal Gonzalez entró al servicio militar contra su voluntad; que se le reaprehendió como desertor estando comprendido en la ley de amnistía fecha 14 de Octubre de 1870, según la cual debía quedar en libertad; y que en consecuencia, obligarlo á continuar en el servicio de las armas, es violar en su persona la garantía que consigna el art. 5º de la Constitución federal. Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma el fallo del juez 1º de Distrito de México, pronunciado en 5 del presente mes, declarándose: que la justicia de la Unión ampara y protege á Cristóbal Gonzalez contra la determinación del ministerio de la guerra para que siga de soldado, por violarse en su persona la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución de la República, debiendo ser puesto en libertad el quejoso.

Devuélvanse sus actuaciones al referido juez de Distrito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos

Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, veintitres de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza, por el C. Pedro J. Senties, en favor de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés, jefe político el primero de Chalchicomula y el segundo de Tecali, contra el juez nato de Distrito del mismo Estado, por los procedimientos de este en la causa que instruye á Urrutia y á Cortés por abusos electorales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez 2º suplente de Distrito.

Los diversos abusos que se han hecho del recurso de amparo, no suministran ejemplo de uno semejante al presente, y difícil será que otro caso igual se repita, pues no es posible que se unan tanta malicia por una parte y tan punible condescendencia por otra, cual ha sucedido en el que me ocupo.

La ley de ocho de Mayo último, consignó á los jueces de Distrito el conocimiento de los delitos que en materia de elecciones pudieran tal vez cometerse: eran por lo mismo de la privativa jurisdicción de tales juzgados esos delitos, y una vez cometidos, tenían ellos facultades de comprobarlos, para aplicar á los infractores las penas de la propia ley.

Tal conducta de parte de los jueces no importa violación de garantía alguna, ni vulnera en nada la soberanía de los Esta-